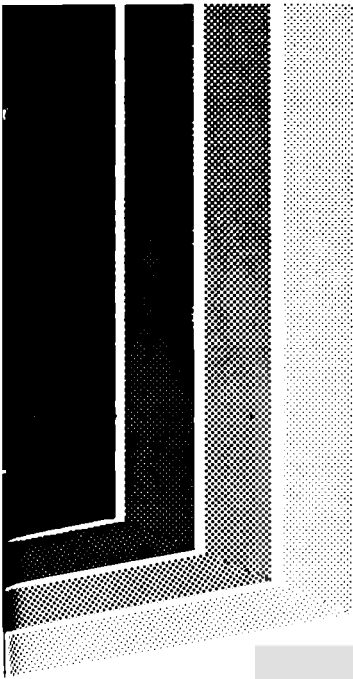




Política Estadounidense Y Proceso Revolucionario: El Caso de El Salvador *

Tommy Sue Montgomery

RESUMEN

La política de los Estados Unidos en El Salvador está condicionada por una ceguera ideológica, una nueva mentalidad de guerra fría en Washington, y un temor de que El Salvador siga los pasos de Nicaragua en el camino revolucionario. Al mismo tiempo, los Estados Unidos continúan afirmando su preocupación por los Derechos Humanos, como base de su política exterior. En El Salvador la política estadounidense ha operado a dos niveles: 1) el nivel público, apoyando a la Junta Revolucionaria de Gobierno y su política de reformas, y 2) el nivel privado, que por una parte ha abogado por "ley y orden" ante las Fuerzas Armadas (lo que se traduce en represión) y, por otro, ha dado un fuerte apoyo a la empresa privada (que es un fuerte apoyo a la extrema derecha); ninguna de las dos concreciones ha sido entendida por los Estados Unidos. Con la llegada del nuevo embajador norteamericano, la política de los Estados Unidos es más clara: en primer lugar, parar la represión, y al mismo tiempo apoyar fuertemente al gobierno democristiano-militar.

En conclusión, pensamos que las Organizaciones Populares de El Salvador no pueden ser excluidas de ninguna solución verdadera, y si los Estados Unidos no adoptan una política que las reconozca y las integre, sólo contribuirán a prolongar la agonía.

La actual política de los Estados Unidos con respecto a El Salvador fracasará inevitablemente, como lo hizo en Nicaragua hace nueve meses.

La ceguera ideológica de las personas que formulan la política de los Estados Unidos, ha contribuido a crear una situación de polarización política en la que las organizaciones populares izquierda, que cuentan en total varios cientos de miles de militantes, y muchos miles más de simpatizantes, están luchando para quitarle el control político y económico del país a un número pequeño de personas (no más de dos mil) que constituyen la oligarquía¹ y sus aliados dentro del sector privado empresarial. El actual gobierno,

nominalmente en las manos de los demócratas cristianos y los militares, ofrece teóricamente un centro político que los Estados Unidos apoyan. De hecho, el Centro de la política salvadoreña se desmoronó el 3 de enero (los democristianos afirman lo contrario) con la renuncia masiva del go-

- * Este artículo es resultado de cuatro meses de investigación (que ha incluido numerosas entrevistas) en El Salvador, y forma parte de un estudio más amplio de la vida política del país. Las fuentes individuales de información, a menos que sean citadas en el artículo o en las notas, deben quedar anónimas por razones de seguridad, o porque las entrevistas fueron realizadas en ese carácter, por acuerdo "no oficial".

bierno de la primera Junta, y no ha sido resucitado.

La ceguera ideológica de ciertos norteamericanos gestores de la política impide efectivamente a los Estados Unidos entender, aceptar (hasta que se ven obligados) o apoyar cualquier proceso de cambio social fuera de los límites definidos de la Democracia Liberal (elecciones, partidos políticos, grupos de interés), y del capitalismo. Igualmente, aquéllos que dominaron el proceso político en el Departamento de Estado, a menudo interpretaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional como un instrumento de la "conspiración comunista internacional", que estaba siendo manipulado por Cuba. La base profundamente nacionalista de los sandinistas, y del 95% de nicaragüenses que apoyaron la lucha para liberar su país de una dictadura impuesta por los Estados Unidos 47 años antes, nunca fue entendida por quienes tuvieron la mayor responsabilidad en formular la política de los Estados Unidos con respecto a Nicaragua en 1978 y 1979.

El presente ambiente político en Washington D.C. es también un factor importante para entender la política entre El Salvador y Estados Unidos. La invasión Rusa en Afganistán ha

traído una nueva mentalidad de guerra fría en el Congreso, la Casa Blanca, y el Departamento de Estado. Esta mentalidad ha hecho que sea más difícil de lo normal, para fuerzas más moderadas, influenciar la formulación de la política.

Generalmente los asuntos políticos como el de El Salvador, se dividen en dos posiciones: 1) La del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski, junto con William Bowdler, que asumen consistentemente una posición anticomunista de línea dura; 2) La posición de los oficiales más jóvenes de la oficina de asuntos extranjeros del Departamento de Estado. Dado que la combinación Brzezinski-Bowdler, y el entonces embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Frank Devine, compartían la misma visión del mundo, no es sorprendente que la política de los Estados Unidos haya evolucionado como se describirá a continuación.

La importancia de El Salvador, para los intereses de la política de los Estados Unidos, está enfatizada por el hecho de que para febrero de 1980, el Departamento de Estado tenía tres grupos de trabajo,² uno para Afganistán, otro para Irán, y otro para El Salvador.



La política de los Estados Unidos en Centro América, sigue una fórmula standard. De acuerdo a los diplomáticos más antiguos de los Estados Unidos, se quiere un gobierno que:

- 1) Sea amigable y no comunista.
- 2) Se incline a cooperar con los Estados Unidos en la arena internacional.
- 3) "Se incline a las aspiraciones democráticas de su pueblo".
- 4) Responda en "alguna manera" a las necesidades y al bienestar de la población.
- 5) Generalmente respete los Derechos Humanos de sus ciudadanos.

La política de los Estados Unidos hacia El Salvador, tal como se ha desarrollado en la Administración de Carter, debe ser entendida en términos de cierta dinámica.

Primero, hubo un fuerte énfasis de la administración en los Derechos Humanos, en 1977. Esta posición, unida a la condena de varias organizaciones internacionales, y un reporte oficial de los Estados Unidos sobre las violaciones a los Derechos Humanos en El Salvador, condujeron al cese de toda la ayuda económica y militar inmediatamente después de que Jimmy Carter llegó al poder.

Después del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, los Estados Unidos, con una gran señal de alivio, ofrecieron de nuevo ayuda económica y militar a su pequeño vecino. Ante la proclama de las Fuerzas Armadas, que oficialmente prometió respetar los Derechos Humanos y seguir una política de cambios económicos, incluyendo Reforma Agraria, y ante la posición oficial de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que hizo promesas similares, parecía que la posición del Gobierno salvadoreño a favor de un cambio estaba en las manos de un sector iluminado y progresista de la sociedad y había detenido exitosamente la creciente presión de las organizaciones de izquierda. Desafortunadamente, la Junta y los sectores progresistas del ejército, con toda su buena fe y buenas intenciones, no pudieron cambiar el patrón de comportamiento dentro de los Cuerpos de Seguridad (especialmente la Guardia Nacional y la Policía Nacional) que tienen esencialmente una mentalidad de disparar primero y hacer preguntas después, la que, a su vez, es el resultado directo de una política represiva.

Los Estados Unidos no participaron en ninguna forma en el golpe del 15 de octubre. Los oficiales de la Embajada se enteraron de que algo

había en el ambiente; algunas personas que estaban planeando el golpe se acercaron a los oficiales de la Embajada para sondearlos acerca de su reacción a tal actividad de los sectores progresistas del Ejército, apoyado por civiles de centro izquierda. Así fue como un oficial de la Embajada dijo: "Nosotros escuchamos, pero ni los animamos ni los desanimamos. Por primera vez en nuestra historia, no tuvimos nada que ver con eso". Cuando se les preguntó si el silencio no podía haber sido tomado como apoyo, ellos reconocieron que era posible; pero a otros, con quienes los Estados Unidos hubieran estado mucho menos felices si dieran el golpe, se les dio una respuesta similar: Silencio.³ Esta actitud de "manos fuera" de los Estados Unidos, contrasta con todo el esfuerzo realizado para detener el golpe de extrema derecha a finales de febrero; algo que será discutido después.

Para los Estados Unidos, el golpe de Estado fue un alivio enorme. Pareció resolver dos problemas principales: se libró del gobierno de Romero y de sus espantosos records en los Derechos Humanos y debilitó a la izquierda, que estaba obteniendo apoyo diario a lo largo de todo el país a medida que la represión crecía.

Los Estados Unidos aceptaron la Proclama de las Fuerzas Armadas, como un documento político que podían tolerar fácilmente, y oficialmente tomó la posición de que las propuestas de reformas económicas, incluyendo la Reforma Agraria, Nacionalización del Comercio Exterior, Nacionalización de la Banca, reconocer el Derecho de Organización de los Campesinos, eran asuntos del Gobierno salvadoreño.

Desafortunadamente para la Junta Revolucionaria de Gobierno, los problemas comenzaron casi inmediatamente. La izquierda, que hasta el 15 de octubre había estado proyectando una insurrección para enero-febrero, encontró su momentum súbitamente detenido. Las encolerizadas reacciones de algunos sectores de izquierda incluyeron esfuerzos fallidos para ocupar Mejicanos y Soyapango, dos poblaciones de San Salvador; y las ocupaciones exitosas de dos Ministerios, así como las constantes manifestaciones, produjeron una cantidad de muertos en las primeras dos semanas de la Junta, que excedieron la tasa de muertos en los primeros nueve meses y medio del año bajo el régimen de Romero. Una manifestación el 29 de octubre dejó 21 muertos, lo que podía haberse evitado si la Guardia Nacional se hubiera mantenido fuera.



Además de estos problemas inmediatos, la realidad política salvadoreña destruyó en formas más fundamentales las metas e ideales de la Junta y contribuyó a su caída del 3 de enero. En primer lugar, los militares jóvenes, con todas sus promesas de erradicar la corrupción en el ejército y de realizar los cambios económicos y sociales tan necesitados en El Salvador, padecieron de una gran ingenuidad política.

Además, los oficiales jóvenes compartían el terror de la derrota que condujo a la Guardia Nacional de Nicaragua a su total destrucción como Institución. El primer problema hizo que el ejército respondiera legalmente, más que políticamente, cuando se enfrentó con un ultimátum hecho por todos, menos uno de los Ministros de Estado, al final de diciembre. A través de su Institución Autoformada, el Consejo Permanente de la Fuerza Armada (COPEFA), al que los ministros entregaron sus demandas para que detuvieran la creciente represión de los Cuerpos de Seguridad, ellos deliberaron por tres días y rechazaron la demanda de los ministros, diciendo que COPEFA era una Institución no política y, por lo tanto, no podía verse envuelta en un asunto esencialmente político. COPEFA, sin embargo, fue creada para un propósito profundamente político: asegurar que la Proclama se llevara a cabo.

El otro problema, su miedo a la destrucción,

produjo una situación que la extrema derecha explotó efectivamente. A través de una variedad de medios, primeramente el contacto directo con el alto mando, la derecha se dedicó a convencer a oficiales claves, especialmente a José Guillermo García, Nicolás Carranza, y Eugenio Vides Casanova, que: 1) el triunfo de la izquierda en una revolución significaría la disolución del ejército y los cuerpos de seguridad; 2) una revolución significaría el triunfo del comunismo en un país más; 3) los cambios económicos propuestos por la Junta, eran realmente un comunismo disfrazado.

Este último argumento refleja el segundo aspecto de la realidad que ha afectado el curso de los eventos políticos en El Salvador. Esa realidad es la presencia de un ala derecha, compuesta de miembros de la oligarquía y la burguesía que no están dispuestos a aceptar ninguna reforma social o económica que afecte en alguna medida sus intereses económicos. Su política oscila desde una mentalidad neofascista en la que no existe justicia social, pasando por una noción de Hobbes y Locke en la que la única función del Estado es mantener la ley y el orden de manera que los individuos, especialmente en sus relaciones de mercado, puedan perseguir sus propios intereses, hasta una noción liberal de mediados del siglo veinte en la que el Estado tiene algunas responsabilidades en áreas tales como Educación, Salud, y Vivienda.

Estos intereses económicamente dominantes en El Salvador, están influenciados por el milagro económico chileno, que descansa bastante en las teorías de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, que ha creado un crecimiento económico enorme desde la caída de Salvador Allende en septiembre de 1973. Pero, los costos sociales que los chilenos han pagado en términos de libertades políticas, y el hecho de que el auge no alcanzó a los porcentajes más bajos de la sociedad chilena, que está ahora peor que hace 7 años cuando la inflación era fuerte, es un aspecto nunca mencionado por la élite económica salvadoreña. De nuevo, este grupo incluye a aquéllos que justificarían con gusto una solución chilena en El Salvador, hasta aquéllos que la tolerarían, a aquéllos que la encontrarían personalmente detestable, pero que la aceptarían como preferencia a una revolución de izquierda, o aun a reformas de izquierda tales como las propuestas por la primera, y promulgadas por la segunda Junta a finales de febrero.

Es en este contexto, donde la política de los Estados Unidos hacia El Salvador debe ser examinada. Esa política ha sido más bien una respuesta a los eventos a medida que se van desarrollando, en vez de un esfuerzo para contribuir y apoyar creativamente las políticas de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

El problema con la política exterior de los Estados Unidos en El Salvador es que ha operado en dos niveles. Oficialmente, la política de los Estados Unidos es la de apoyar los Derechos Humanos, y animar los cambios económicos-sociales y políticos que resultarían de una distribución más justa de la riqueza y de reducir los fuertes problemas sociales con los que el país se enfrenta. En un país más o menos del tamaño de Massachusetts viven 5 millones de personas, más del 50% son analfabetos, un 60% de ellos pueden encontrar únicamente trabajo estacional durante las cosechas de café, algodón y caña de azúcar; el 0.7% de la población posee el 38% de la tierra cultivable, mientras el 41.1% no posee nada. Los oficiales de los Estados Unidos han afirmado insistentemente su apoyo a la Junta y a sus programas, y un oficial ha reconocido que la caída del gobierno el 3 de enero de 1980, provocó "consternación".

Al mismo tiempo, lo que en verdad los Estados Unidos han hecho, ha producido resultados muy diferentes de los que la Embajada ha afirmado que quiere.

En primer lugar, habiendo hecho del asunto de los Derechos Humanos un problema principal desde principios de 1977 hasta el 15 de octubre de 1979, los Estados Unidos permanecieron callados ante el creciente número de masacres y asesinatos a manos de los cuerpos salvadoreños de seguridad y de civiles después del golpe. Oficialmente, la Embajada mantiene que la política de los Derechos Humanos continúa estando presente, pero dice que la política ha sido promovida a través de otros canales más silenciosos. Si ese es el caso, las protestas norteamericanas concernientes a las violaciones de los Derechos Humanos han tenido poco efecto; en el mes de enero de 1980, 309 personas murieron a manos de la Guardia Nacional, Policía Nacional y de personas vestidas de civil: más de las que murieron durante el año de 1978 en el régimen de Romero.

Segundo, con la creciente agitación de la Izquierda en forma de manifestaciones, ocupaciones de embajadas, fábricas, haciendas y Ministerios, de bombas colocadas estratégicamente

y de ataques sorpresivos a varios cuarteles de los Cuerpos de Seguridad en el país, los Estados Unidos comenzaron a promover una línea de "ley y orden" entre los militares salvadoreños. Más o menos, el argumento era: "la Izquierda tiene que ser puesta bajo control. Ustedes no pueden permitir que ellos salgan impunes en esta clase de ataques, porque éstos aumentarán en frecuencia e intensidad, y antes que sea muy tarde, la izquierda comenzará una insurrección".

Es importante entender que los oficiales de los Estados Unidos tienen una definición de "ley y orden" clara, de democracia liberal. Para ellos es el mantenimiento de un orden social dentro de un marco constitucional y legal que la mayoría de sus ciudadanos goza la mayor parte del tiempo, dentro de su propio sistema político. Supone un sistema legal que trabaja y una fuerza policial que está bien entrenada, relativamente bien educada, y no trabaja durante las horas extras como



asesinos pagados o vigilantes de las clases adineradas. Como ninguno de estos prerrequisitos se aplican en El Salvador, lo que sucede es que la "Ley y Orden" se traduce instantáneamente en represión, un hecho que la Embajada de los Estados Unidos ha decidido pasar por alto o ignorarlo. (No está claro quien de la Embajada, porque los oficiales rehusan aceptar que esta transformación ocurra.) Más aún, ellos alegan que las actividades terroristas de la Izquierda provocan tácticas duras y que cuando la Izquierda se logre controlar, estas tácticas no se van a necesitar nunca más. Ellos también expresan la esperanza de que con el resurgimiento de la ayuda militar, la que incluye entrenamiento de tropas, las fuerzas armadas salvadoreñas pueden hacerse más eficientes y menos bárbaras en sus métodos de control de la población. Teóricamente, la diferencia consistirá en usar gas lacrimógeno en vez de balas.

Tercero, la Embajada de los Estados Unidos, particularmente a través de sus oficiales más importantes, ha apoyado activamente la comunidad empresarial de El Salvador. Un oficial reconoció que él ha apoyado fuertemente los sectores privados empresariales porque siente que se ha hecho una injusticia por parte del Gobierno, desde el 15 de octubre, y especialmente por los Demócratas Cristianos, que impusieron, como un prerrequisito para unirse al Gobierno, después del 3 de enero, que el sector empresarial fuera excluido de la Junta y de los ministerios. La posición de la Embajada es que el sector comercial es uno de los sectores más importantes de la sociedad salvadoreña y es por consiguiente tonto, si no temerario, excluirlo.

En lo que los Estados Unidos han fracasado en entender es, que promoviendo una línea de "ley y orden" por un lado, y apoyando los negocios de la empresa privada por otro, le hacen el juego indirecto a la extrema derecha que está compuesta por los miembros de la oligarquía y de sectores empresariales, y que ha comenzado un reinado de terror en El Salvador.

La naturaleza dual del mensaje de los Estados Unidos se ejemplifica revisando las dos reuniones que el Secretario Asistente de Estado, William Bowdler (acompañado por el entonces Embajador Frank Devine), tuvo cuando pasó por El Salvador del 23 al 24 de enero. En una reunión con Monseñor Oscar A. Romero, Arzobispo de San Salvador, la conversación fue como sigue:

Bowdler: Nosotros no queremos continuar hablando a favor de los cambios urgentes, sino para el futuro.

Romero: Quien quiere los cambios es el pueblo.

Devine: Los grupos populares quieren el poder, no los cambios.

Romero: La gente quiere los cambios rápidos, y cuanto más rápido vengan, menos violencia habrá.

Devine: Los problemas en El Salvador están siendo manipulados por el Comunismo Internacional.

Otro sacerdote que estaba presente habló en este momento y dijo: "Yo creo que Rusia tiene problemas más importantes que resolver y que Rusia no está interesada en los problemas de un país muy lejano y muy pequeño". El sacerdote agregó que el poder económico y político de los Estados Unidos podía ser usado para ayudar a efectuar cambios en El Salvador.

En el curso de la conversación, Bowdler trató de conseguir que Romero apoyara al Gobierno demócrata cristiano-militar, un pedido que Romero terminantemente rechazó. (El ha tomado consistentemente la posición de que el papel de la Iglesia no es respaldar un gobierno específico.)

Finalmente, cuando Bowdler se dio cuenta de que había chocado contra una pared, con Romero, dijo: "Vamos a apoyar los cambios".

En otra reunión con la Asociación Nacional de la Empresa Privada —ANEP— Bowdler comenzó un tema familiar. De acuerdo a un directivo de esa organización, Bowdler dijo que estaba enterado de la infiltración comunista en El Salvador, y de que los comunistas están muy activos; sería mejor, continuó, tener el gobierno actual que lo que venga después. Bowdler también señaló que el espectro de un golpe de la extrema derecha era real, así como la posibilidad de una guerra civil. Dadas estas alternativas, el Asistente del Secretario de Estado, concluyó que era mejor tener a los democristianos en el poder.

Pero Bowdler no concluyó con esto. El directivo de ANEP reportó que Bowdler había afirmado: "Tenemos que mover los democristianos al centro y hacer que actúen menos demagógicamente de lo que están actuando". Bowdler dijo que los Estados Unidos no están interesados en ver a los demócratas cristianos irse a la extrema izquierda o comportarse como la extrema izquierda. La cosa más importante que hay que hacer, concluyó Bowdler, es reestablecer la Ley y el Orden.

En el contexto salvadoreño, "mover a los demócratas cristianos al centro" significa modificar, u olvidarse de la Reforma Agraria propuesta, de la Nacionalización del Sistema Bancario y del Comercio Exterior, todo ello fuertemente controlado por la oligarquía y por un pequeño grupo de hombres de negocios que se han opuesto fuertemente a la Reforma. Un oficial de la Embajada terminantemente negó que se hayan hecho diferentes peticiones a la Iglesia y ANEP, e insistió que las mismas peticiones se hayan formulado a ambos: Apoyo al Gobierno y a los cambios que está proponiendo. Pero está claro que los elementos de la extrema derecha de la oligarquía, de la burguesía y de los militares, han estado recibiendo diferentes mensajes.

Esto se dejó ver muy claramente a finales de febrero, cuando existían rumores de un inminente golpe de Estado de la extrema derecha. La existencia de un plan escrito de tal golpe fue confirmada, y tendría como líderes al Ministro de Defensa, y al Subsecretario, una vez que el golpe fuera llevado a cabo.⁴ Por un período de tres semanas el golpe se esperaba todos los fines de semana y últimamente, a finales del mes; se escuchaban apuestas sobre si el golpe sería el 27, el 28 o el 29. Pero el primero de marzo, nada había ocurrido.

Hay dos razones para que no ocurriera este evento: 1) El ejército está profundamente dividido y los dos cuarteles en San Salvador, entre otros, están firmemente en manos de los militares jóvenes. San Carlos, localizado en el centro de la ciudad, tiene unos 1.000 hombres, mientras el Zapote, el Centro de Comunicaciones localizado cerca de Casa Presidencial, tiene 500. Para llevar exitosamente un golpe hubiera supuesto una tarea difícil el vencer a estos dos cuarteles, el primero de los cuales tiene la reputación de estar fuertemente surtido con armas contra tanques y contra aviones. El plan escrito para el golpe consideró la división en el ejército y, a diferencia del golpe de octubre, contaba con la participación de la Guardia Nacional.

2) La extraordinaria presión que los Estados Unidos pusieron sobre los militares y la oligarquía. Desde Washington y San Salvador, la noticia salió a través de muchos medios: el golpe de Estado preparado por la derecha era completamente inaceptable a los intereses de los Estados Unidos y se opondrían antes y después del golpe.

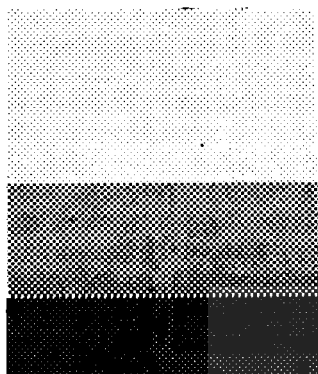
El alto mando militar fue llamado, y miembros de la oligarquía, fueron invitados a la

Embajada para escuchar el mismo mensaje: Los Estados Unidos, no pensaban que las alternativas que se visualizaban (un golpe de la extrema derecha) beneficiarían al país y que lo mejor era tratar, y hacer, que el Gobierno trabajara y se mantuviera unido. Los Estados Unidos, no estaban apoyando necesariamente ningún individuo, ni grupos de individuos, pero cualquier cambio que significara un impedimento a las reformas propuestas, sería muy difícil que los Estados Unidos lo apoyaran. Más aún, si fuera un Gobierno de la extrema derecha, los Estados Unidos, no sólo no lo apoyarían, sino que se opondrían a él.

Hay también indicaciones de que los Estados Unidos, utilizaron presión en Miami, enviando un representante para informar a los miembros de la oligarquía que residen allí, que sus visas de residencia se las quitarían si llevaban a cabo el golpe de Estado. En Florida vieron referencias al "caso Somoza", recordando la amenaza de los Estados Unidos de sacar a Somoza cuando en Nicaragua el Presidente interino, Urcuyo, anunció el día después de que Somoza renunció, que intentaba continuar en la presidencia hasta 1981, en lugar de las 24 horas que se habían acordando antes de que Somoza saliera.

La situación en la que los Estados Unidos se encontró la última semana de febrero fue, de hecho, una situación que ellos mismos habían ayudado a crear. Promoviendo una línea de "Ley y Orden" con los salvadoreños, los oficiales estadounidenses, estaban animando a los elementos más conservadores, si no reaccionarios, dentro de la Fuerza Armada, en su propia política de represión en El Salvador. Al mismo tiempo, los militares estaban recibiendo presión de los elementos de la extrema derecha, los cuales protestaban porque los desórdenes civiles estaban afectando bastante sus intereses económicos, y que la amenaza del Comunismo Internacional tenía que ser detenida.

Por apoyar fuertemente al sector privado empresarial, los Estados Unidos estaban apoyando, desde otra dirección, a los elementos más reaccionarios en la sociedad salvadoreña, la mayoría de los cuales son miembros de ANEP. Cualquiera que fuera el mensaje que los Estados Unidos intentaron que ANEP recibiera, los miembros de su organización no escucharon un fuerte apoyo para la Junta o las reformas económicas que propuso. De manera que tenían buena razón para creer que los Estados Unidos



aceptarian un golpe de extrema derecha, así como habían aceptado el golpe moderado de octubre. ANEP no entendió porqué los Estados Unidos nunca dejaron absolutamente claro que una solución al estilo chileno para los problemas de El Salvador no era aceptable; que había límites, en cuanto a cuán lejos los Estados Unidos estaban dispuestos a ir, en un esfuerzo para prevenir otra revolución en América Latina.

Un oficial aceptó que los Estados Unidos probablemente deberían haber sido más específicos antes sobre qué era lo que nosotros queríamos y haríamos. Pero, agregó, los Estados Unidos estaban tratando de jugar muy abierta y honestamente para evitar la necesidad de una intervención. "Nosotros probablemente deberíamos haber dejado claro cuál era nuestra política", concluyó.

La reacción de la derecha fue predecible. Encolerizada por la "intervención" de los Estados Unidos, después de meses de apoyo abrumador para la Junta y sus políticas, un miembro de la burguesía planteó la pregunta retórica, "cuando los Estados Unidos están en un callejón sin salida, ¿qué hacer?" Y contestó: "se porta como un poder muy grande, mostrando cuán macho es, y diciendo: No-no, tú no vas a hacer eso". Otro comentó que los Estados Unidos necesitan comunicarse más "sin prejuicio" y que necesitan recordar sus propios principios (Bill of Rights). "Nosotros tenemos el derecho de determinar como vivir, sin tomar patrones extranjeros", concluyó.

Es así que los Estados Unidos, habiendo promovido por varios meses una política, que sirvió sólo para reforzar a los elementos más reaccionarios en la vida política salvadoreña, de súbito se encuentra cara a cara con las consecuencias de esa política, consecuencias con las que no estaban preparados para vivir.

Si los Estados Unidos han tenido éxito en eliminar la probabilidad de otro golpe, o sólo en posponerlo, eso falta por ver. La extrema derecha en El Salvador está suficientemente desesperada como para ignorar las amenazas de los Estados Unidos, porque, desde su perspectiva, a largo plazo la ayuda estadounidense no es tan estratégica a sus propios intereses. Lo que ellos quieren es la imposición de la "ley y el orden", un final a la amenaza de la izquierda, y la libertad para crear su propio milagro económico en El Salvador. Un golpe de extrema derecha, seguido del asesinato de unas 100 mil personas, creen permitiría promover sus intereses económicos con poca interferencia.³ Tal golpe probablemente no produciría un gobierno totalmente militar, sino una tercera Junta que estaría compuesta por militares y civiles conservadores del sector privado.

Por otro lado, con la promulgación de la Reforma Agraria y la Nacionalización de los Bancos, que se está llevando a cabo sin la presencia de reacciones tempranas de los intereses afectados, se debe considerar como la posibilidad de que el Gobierno, de hecho, implementará las Reformas; en las fincas ocupadas las plantaciones se van a hacer de prisa; la nacionalización traerá nuevas fuerzas a los sistemas bancarios; las salidas de capital serán detenidas; y los que han perdido sus tierras e Instituciones Financieras, comenzarán a invertir su riqueza en la industria salvadoreña, y el gobierno adquirirá una nueva imagen de apoyo de la clase media y de los campesinos que han recibido la tierra.

Si, como algunos observadores creen, la derecha no tiene el poder para responder efectivamente a este asalto a sus intereses, entonces los demócratas cristianos tienen una nueva pforroga para los próximos meses. Mientras tanto, los Estados Unidos se están preparando para poner 49

millones de dólares en varias formas de asistencia para el Desarrollo de Comunidades Marginales, una prioridad principal del actual gobierno. Esto no sólo incluye mejorar la calidad de las viviendas en los tugurios y mesones de las ciudades, especialmente San Salvador, sino también mejorar la salud y las condiciones sanitarias, proveer agua potable, y resolver la tenencia ilegal de lotes que la gente está ahora usurpando.

La ayuda también se canaliza para ciertas organizaciones privadas como la Asociación Lechera, para el desarrollo de pequeños negocios, a través de FENAPES, y para la rehabilitación de Sistemas Cooperativos, trabajando primariamente a través de INSAFOCOOP.

Como es políticamente imposible para los Estados Unidos realizar una intervención militar directa en El Salvador, ahora están intentando desarrollar un programa multilateral de ayuda. Acompañado de la asistencia militar, que incluye instrucción técnica y entrenamiento dentro y fuera del país, los Estados Unidos tienen algún proyecto de incorporar el apoyo de Venezuela, aunque el monto de esa asistencia no es todavía muy claro. Y los Estados Unidos tratan de resucitar el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), que empezó a desintegrarse en 1969, con la guerra honduro-salvadoreña, y murió en julio de 1979 con la caída de Somoza.

Pero, la ayuda que ha enfurecido a varios sectores de la sociedad salvadoreña, incluyendo a la Iglesia, a elementos de Centro Izquierda no alineados con las organizaciones populares, y a

las organizaciones populares, son los cinco millones de dólares dedicados a la asistencia militar. Monseñor Romero expresó su oposición en una carta al Presidente Carter:

"Me preocupa bastante la noticia de que el Gobierno de E.U. esté estudiando la forma de favorecer la carrera armamentista de El Salvador, enviando equipos militares y asesores para "entrenar a tres batallones salvadoreños en logística, comunicaciones e inteligencia". En caso de ser cierta esta información periodística, la contribución de su Gobierno, en lugar de favorecer una mayor justicia y paz en El Salvador, agudizará sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo organizado, que muchas veces ha estado luchando porque se respeten sus derechos humanos más fundamentales."

Los Estados Unidos habían dado hasta noviembre de 1979, 200 mil dólares en materiales de control de masas, incluyendo chalecos a prueba de balas, cascos de acero y gas lacrimógeno. Los Estados Unidos también dieron, de acuerdo a una fuente oficial, "algún entrenamiento de cómo usar estos instrumentos con la idea de hacer que los Cuerpos de Seguridad fueran efectivos en controlar y dispersar una multitud, en vez de matarla".

Pero Monseñor Romero se refirió a esta asistencia diciéndole al Presidente Carter en la misma carta:

"Usted mismo debe estar informado que es evidente que a partir de entonces los cuerpos de seguridad con mayor protección personal y efica-



cia han reprimido aún más violentamente al pueblo, utilizando armas mortales”.

La respuesta de los Estados Unidos fue escrita por el Secretario de Estado, Cyrus Vance, en nombre del Presidente Carter. Dijo, entre otras cosas:

“Como usted indica, la promoción de los derechos humanos ha sido, y continúa siendo, una de las principales metas de la política exterior de nuestro Gobierno, y puedo asegurarle que es la base de todos los aspectos de la política de los Estados Unidos para El Salvador.

La Junta Revolucionaria de Gobierno ha demostrado ser moderada y reformista. Los Estados Unidos, dedicados por tradición y una larga práctica, a los principios democráticos, se sienten preocupados por la grave situación política de El Salvador y están preparados a contribuir en soluciones pacíficas y progresistas. Creemos que el programa de reformas de la Junta, ofrece las mejores perspectivas para un cambio pacífico hacia una sociedad más justa. Por lo tanto, hemos atendido las solicitudes de ayuda por parte de la Junta para contribuir al logro de sus metas. Comprendemos su preocupación sobre los peligros de proporcionar ayuda militar, dadas las actuaciones desafortunadas que ocasionalmente han tenido las fuerzas de seguridad en el pasado... Nos preocupa, tanto como a usted, que tal ayuda no sea usada en forma represiva. Por esa razón, cualquier equipo y adiestramiento que pudiéramos proveer estarían destinados a mejorar el nivel profesional de las Fuerzas Armadas de manera que puedan cumplir con su tarea esencial de mantener el orden con un uso mínimo de fuerza letal.

Compartimos su repulsión por la violencia, provocada por ambas extremas, que está segando la vida de tantas personas inocentes. Deploramos los esfuerzos de quienes tratan de silenciar las voces de la razón y la moderación con explosivos, con la intimidación y el asesinato.

Los Estados Unidos, no interferirán en los asuntos internos de El Salvador”.

Lo que los Estados Unidos han pretendido ignorar hasta muy recientemente, es que la violencia y la amenaza de la estabilidad social de la derecha es actualmente mucho mayor que la de la izquierda. En términos de los puros números de gente asesinada por civiles armados, en lo que podrían considerarse asesinatos pagados (como el de Mario Zamora Rivas), así como por la Guardia Nacional y la Policía Nacional, se ase-



gura que para 1980, ya son mucho más elevados que los de los regímenes del Presidente Romero y Molina.⁷

Hasta recientemente, los Estados Unidos insistieron en la posición de que la extrema izquierda constituía la amenaza más grande a la paz y seguridad en El Salvador. Con la llegada, sin embargo, de su nuevo Embajador, Robert White, los Estados Unidos han clarificado su política y han empezado a enunciarla en términos claros y no ambiguos. Según White, “el mensaje es nítido: no solamente oponerse a un Golpe de la extrema derecha, sino dejar claro que el peligro principal para este gobierno es la violencia de la derecha; la prioridad primera, dice, es terminar con la violencia de la derecha”. White hace una distinción entre la violencia de la derecha y la de la izquierda, y cree que la violencia de la izquierda empezó como “una protesta legítima para hacer los cambios; nosotros tenemos culpabilidad por esa situación”.

White no tiene paciencia con la extrema derecha, incluida la derecha de la clase empresarial. Es claro que él no estará en la calle con ANEP, como su predecesor.

Apoya generalmente las posiciones de Monseñor Romero. Y reconoce, al mismo tiempo, que en contra de grandes obstáculos se han realizado profundos cambios a través de la Reforma Agraria y la nacionalización de los Bancos y del Comercio Exterior; piensa que es demasiada exi-

gencia de los críticos, el esperar que el gobierno controle los Cuerpos de Seguridad inmediatamente, cuando hay una historia de abusos a lo largo de casi medio siglo.

No piensa que las elecciones sean una panacea; reconoce que han sido usadas en el pasado para engañar al pueblo. Cree que una solución política viable debe incluir a las organizaciones populares y al sector progresista de la empresa privada. Hasta este momento, el sector de "Alfonso Robelo" de El Salvador, no ha sido cortado por algunos elementos de la izquierda, y ha sido ignorado tanto por los democristianos como por la derecha.

Aunque White lleva poco tiempo en El Salvador, es claro que está convencido de que no se deben repetir los errores de los Estados Unidos en Cuba y Nicaragua. En el último caso, oficiales de la Embajada y del Departamento de Estado rehusaron platicar con miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por el hecho de que eran "extremistas izquierdistas y terroristas". Un antiguo Embajador en Nicaragua, cuando se le preguntó privadamente si no había hecho en algún momento contactos con los sandinistas, dijo: "No, nunca". Cuando se le preguntó por qué, respondió: "No estaba dentro de mis instrucciones". Después un oficial importante, conectado íntimamente con el proceso de negociación en Nicaragua, admitió que hasta diciembre de 1978 no había platicado con el Frente Sandinista porque "ellos estaban en las montañas".

Entonces, seis meses antes de la insurrección nacional, los Estados Unidos estaban buscando una solución política en Nicaragua, que excluyera a los sandinistas. No fue sino hasta que la insurrección última comenzó, en mayo de 1979, cuando los contactos entre los oficiales de los Estados Unidos y los sandinistas comenzaron a realizar grandes esfuerzos para moderar la contextura de la Junta, porque estaba muy hacia la izquierda. Sólo cuando la victoria final era un hecho consumado, y los Estados Unidos no tenían alternativa, aceptaron la Junta, el Plan de Reconstrucción y reconocieron al nuevo gobierno.

Los Estados Unidos, con Robert White como Embajador, probablemente no van a cometer un error semejante en El Salvador. White es abierto y bien dispuesto a platicar con representantes de las organizaciones populares, y ha realizado esfuerzos para lograrlo.

La fuerza política de la izquierda, que bien podía haber sido dudosa, antes del 22 de enero, no puede ponerse en duda desde entonces. En ese día, entre 200 mil y 300 mil personas de todo el país se congregaron en San Salvador para demostrar la unidad de la izquierda y la fuerza de sus organizaciones populares. Lo que comenzó con una marcha pacífica, con orden y disciplina, finalizó trágicamente cuando miembros de la Guardia Nacional, Policía Nacional, y hombres vestidos de civil abrieron fuego desde las azoteas de varios edificios públicos y privados sobre los manifestantes cuando ellos se dirigían a la Plaza Libertad, en el centro de la ciudad. Cuando los manifestantes se retiraron, quedaron 49 muertos y varios cientos de heridos.

La fuerza militar de la izquierda es un secreto cuidadosamente guardado, pero se sabe que hay tres principales fuerzas clandestinas: Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y que cada uno de ellos tiene su propia milicia. Además, hay varios miles de estudiantes universitarios que están dispuestos a tomar las armas en una insurrección.

La Junta y los Estados Unidos esperan que se pueda obtener apoyo con las referidas reformas. Pero el asunto más importante en El Salvador, ahora, para la mayoría de la población, no es la Reforma Económica; es la Represión. Y mientras los Estados Unidos continúan declarando el respeto a los Derechos Humanos, de hecho



(hasta, por lo menos, la mitad de marzo), la Embajada de los Estados Unidos no ha hecho ningún comentario público sobre la creciente espiral de muertes a manos de Fuerzas Oficiales desde el 15 de octubre de 1979.

Hay indicaciones de que White terminará con el silencio. Así, a menos de que haya cambios radicales en la constitución del gobierno salvadoreño en el próximo futuro, empezando con el retiro de García y de Carranza, e incluyendo esfuerzos eficaces de la Junta por ganar apoyo popular, la fuerza y organización política de la izquierda, la creciente represión en el campo y las ciudades, el hecho de que la segunda Junta no tiene una base de apoyo popular, y la fuerte división dentro del ejército, todo esto sugiere que ocurrirá una insurrección o una guerra civil en un año.

Los Estados Unidos están envueltos en sus propias políticas y deseos esquizofrénicos. Por un lado, la política de los Estados Unidos es defender los Derechos Humanos y apoyar el cambio social. El Embajador White llega con un record de haber sido un gran defensor de los Derechos Humanos en Paraguay, su cargo anterior. Pero en Paraguay no tuvo que tratar con la amenaza de una "Conspiración Comunista Internacional".

Por otro lado, los Estados Unidos, habiendo hecho algo así como una paz con la Revolución Nicaragüense, no están ansiosos por algo similar en El Salvador, y especialmente cuando la izquierda no hace ningún esfuerzo para ocultar su orientación marxista. Atrapados en su propio enredo ideológico, que no puede visualizar un cambio social fuera de un contexto de la democracia liberal, los Estados Unidos están mal equipados para tratar con un proceso revolucionario que utiliza un contexto político muy diferente, e insiste últimamente en valores sociales diferentes a los del Liberalismo: no en la abolición de la Empresa Privada, sino en una relación fundamentalmente diferente entre ella y la sociedad en la que opera.

El viejo dicho de Santayana se aplica de nuevo: "Aquéllos que no aprendan de la historia están condenados a repetirla". Los Estados Unidos deben aprender al menos una lección de la historia reciente: así como los sandinistas no pudieron ser excluidos de ninguna solución significativa y políticamente duradera en ese país, de cualquier manera el pueblo, a través de sus organizaciones populares, tendrá la última palabra. A

menos que los Estados Unidos, y su nuevo Embajador, hallen un camino pacífico hacia cambios sociales, políticos, y económicos profundos, los Estados Unidos contribuirán sólo a prolongar la agonía y aumentar el derramamiento de sangre.

NOTAS

1. La "Oligarquía" se refiere a un reducido grupo de familias, que son los terratenientes y beneficiadores más grandes y que durante los últimos 35 años han diversificado sus inversiones para controlar bancos y otras instituciones financieras, compañías aseguradoras, industria, comercio exterior, etc.
2. Un grupo de trabajo es un comité Ad-hoc, formado dentro del Departamento de Estado para tratar asuntos especiales.
3. Los que planearon y realizaron el golpe aceptaron que consideraron el silencio de los Estados Unidos como apoyo. Ellos agregaron que la única cosa que le pidieron a los Estados Unidos, éstos se la negaron. En el día del golpe, primero al Embajador de los Estados Unidos, y luego a un ayudante militar, se les pidió que usaran su influencia para conseguir que el Presidente Romero dejara el país. Romero estaba, al mediodía, recalcitrante, y los oficiales jóvenes querían que se fuera del país antes de que los periódicos de la tarde salieran. El Embajador Frank Devine dijo que, de acuerdo a la política de los Estados Unidos, el no podía intervenir en los asuntos internos de otras naciones. El ayudante militar dijo que pensaría si ayudaría, y que llamaría después. El llamó hasta el siguiente día. Romero fue finalmente convencido por otros medios para que dejara el país alrededor de las cinco de la tarde.
4. Héctor Dada Hirezi confirmó el intento de llevar a cabo un Golpe de Estado en su carta de renuncia a la Junta, el 3 de marzo de 1980.
5. Guillermo Manuel Ungo, relató que en diciembre de 1979, un Coronel del Ejército dijo que sería mejor matar ahora 100 mil a tener que prevenir después una muerte de 200 mil.
6. Carta de Monseñor Oscar A. Romero, Arzobispo de San Salvador, al Presidente Jimmy Carter, el 17 de febrero de 1980.
7. Entre enero y octubre de 1979, 476 personas fueron asesinadas por la Guardia Nacional, la Policía Nacional, ORDEN o la Unión Guerrera Blanca (UGB). Entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, 160 personas murieron a manos de la derecha. Desde el principio del nuevo año, la represión aumentó fuertemente. En enero, 309 personas fueron asesinadas por estos grupos; en febrero, más de 300, y en la primera semana de marzo, 151.